

Carta del Perú

Zafarrancho

La carta que tenía a medio terminar quedará para otra vez y ésta llegará algo tarde; al escribirla sólo alcanzo a sospechar lo que pueda ocurrir de aquí a dos meses. Su carácter, a pesar de no ser yo aficionada a la literatura fantástica, es inevitablemente futurista, pero tal proyección tiene como punto de partida los datos de estos días y su grotesca similitud con otros casos que registra la historia. Lima, 11 de abril de 1992, sexto día del golpe de Estado.)

Podría haber sido otra aburrida noche de domingo en que uno se va a dormir algo más temprano —en efecto, en casa, los demás lo habían hecho—, pero yo me había quedado peleando con el sueño y con una ruma de cuentos presentados a un concurso en el que debía emitir mi fallo y los iba revisando durante los tediosos espacios de propaganda que interrumpían la proyección de una película. Pero el hasta entonces Presidente de la República había dispuesto ponernos la noche patas arriba con un mensaje no anunciado y en cadena nacional. Cuando terminó de pronunciar el primer verbo de la primera frase empecé a temer lo que venía y demoró al menos diez o quince minutos en precisar sus objetivos. Los mecanismos de su discurso eran simplistas y obvios, y estaban encaminados a poner en las cabezas de quienes no piensan por cuenta propia los razonamientos elementales que más tarde esgrimirían para fundamentar su apoyo al nuevo gobierno. «Durante estos veinte meses mi gobierno se *propuso* la construcción de una democracia real...», empezó. Pero el inicio del segundo párra-

fo confirmó mi oscura sensación: «Como muchos peruanos, he pensado que ésta era quizá la última oportunidad para que el Perú fuera al encuentro de su destino...». Un mapa del Perú en segundo plano, en el cual la imagen de Fujimori parece estar insertada como símbolo de su recién estrenado poder, es la escenografía actual para sus mensajes.

Utilizando un discurso abiertamente maniqueo, con el cual selló una estrategia puesta en marcha desde varios meses atrás, degradó a todos los integrantes del Parlamento y del Poder Judicial al nivel de «corruptos y estériles» para surgir él como el «mesías» salvador de nuestro último resto de moralidad. Apartó violentamente la Constitución de su camino, la misma que le permitió llegar a la Presidencia, y él —el Supremo— dejó en suspenso todos los artículos de aquélla que se oponían a sus designios. Ahora, entre sus objetivos se halla la promulgación de una Constitución reformada según su antojo por una comisión de «intelectuales y juristas honestos» que aún no ha podido encontrar. El paso de los días hará que se olvide de la exigencia del adjetivo y tal vez encuentre algunos borrosos nombres, o algún suicida que pretenda evitar con su participación que el país acabe de explotar. Pero qué clase de jurista podrá renunciar a su formación en el marco del respeto a la Constitución para desempeñar semejante papelón, sólo un inmoral o un corrupto como los que el «Supremo Emperador» intenta sancionar.

Es curioso el discurso del poder absoluto, sobre todo cuando pretende revestirse de liberal. Si todo fuera quedarse en las palabras iniciales y paralizar la discrepancia y la necesidad de aclarar, no escucharíamos ciertas divertidas definiciones ni algunos deslices tras los cuales se advierte la naturaleza mentirosa de aseveraciones hechas en las primeras horas. La situación «temporal» de las medidas adoptadas por el autodenominado «gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional» será tan elástica como a Fujimori o a los jefes de las Fuerzas Armadas que lo apoyan les convenga. Como en un juego de entretenimiento, uno se pone a calcular los pasos adelantados en un mítico cronograma: nombramiento de comisiones para realizar las «profundas reformas» (mi escritura infestada de demagogia oficial); convocatoria a plebiscito para aprobar o no los tajos y remiendos a la Constitución; realización del plebiscito; escrutinio

completo con todas las inevitables demoras que las características del país impone; elecciones municipales; en caso de aprobación de las enmiendas a la Constitución que modificarían también la estructura del Congreso, convocatoria a elecciones para nuevos miembros del Parlamento; nuevamente, realización, escrutinio y proclamación de elegidos; desarticulación y destrucción de Sendero Luminoso y el narcotráfico; saneamiento total de la economía; modernización institucional del país; y convocatoria y realización de nuevas elecciones presidenciales. ¿Todo esto —y cuánto más— antes de julio de 1995? Y ¿de qué elecciones se puede hablar si se ha trabajado previamente y se seguirá insistiendo en invalidar moralmente a la clase política a la que ya pertenece Fujimori aunque intente disfrazarse?

Pero volvamos a las declaraciones de Fujimori. El mismo se encargó el 10 de abril de poner una semilla de duda en sus propias promesas. Un periodista mexicano le pidió que especificara el cronograma que su vocero, el primer ministro, había anunciado pocos días atrás fijando un plazo máximo para todas sus acciones de dieciocho meses; su respuesta fue inquietante, aunque no sorprendente para una figura autocrática: «no puedo precisar los plazos porque ahora nos dimos cuenta de que también tenemos que reorganizar el Poder Electoral». Y el domingo 12, en una entrevista en directo concedida a una televisora local, cuando se le pidió que explicara el procedimiento a seguir en la reforma del Poder Judicial y en el nombramiento de nuevos vocales de la Corte Suprema, expresó que la comisión que se formara tendría libertad para actuar, pero que si entre los nuevos nombramientos él consideraba que había algún corrupto se reservaba el derecho al veto. Y cuando se le preguntó su opinión sobre Carlos García y García, segundo vicepresidente de la República, y la actitud del Congreso de nombrarlo Presidente Constitucional en ausencia del primer vicepresidente y previa declaración de la vacancia de la Presidencia, contestó: «Están en las nubes. Esa es la diferencia entre el Perú real y el Perú legal» (¿desliz o reconocimiento subconsciente de su condición de ilegalidad?). Son éstas las contradicciones entre el discurso calculado y escrito y el espontáneo y oral de un gobernante autoritario. El primero se construye para conseguir la aprobación y el segundo es resultado de la seguridad de tal aprobación. ¿Pero acaso estos dos discursos

(o dos aspectos de uno solo) que se muerden la cola no pueden llegar a invertir su ordenamiento? ¿No puede el segundo pasar a ser el más socorrido y provocar, a la larga, la merma de la aprobación?

También el discurso oficial en materia de Constitución y legitimidad del régimen se advierte confuso y contradictorio. Los argumentos esgrimidos con mayor frecuencia para justificarlo son, entre otras variantes, que el gobierno es constitucional porque no ha desconocido todos los artículos de la Constitución y que su legitimidad emana del pueblo que lo eligió, en este caso se aplica el concepto sólo al titular del Ejecutivo y no a los vicepresidentes ni al Poder Legislativo. Otro argumento de este discurso es que no se trata de un gobierno derivado de un golpe militar porque no se ha aumentado el número de ministros pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Risibles argumentos que no alcanzan siquiera el nivel de una explicación para el jardín de la infancia. ¿O es que el discurso ha derivado en comicidad popular? Esto parece confirmarse cuando Fujimori llama a la democracia «coimacracia» y «cascarón» sin huevo, pero a la vez sigue utilizando el término en otros momentos de su discurso. Y su burlona sonrisa acompaña perfectamente a la afirmación con la que concluye una entrevista: «Total garantía de los derechos constitucionales» (Perdonen la pregunta: ¿los de su familia y allegados?).

Mientras tanto y desde que se publicaron las primeras encuestas, pasea por las calles estrenando nuevo corte de traje; asiste al segundo tiempo de un partido de fútbol cuando el estadio ya se encuentra lleno; se adueña de la ceremonia de cambio de mando de la Asociación de Exportadores donde, dicho sea de paso, les toma el pelo con personal estilo; hace una visita al diario más antiguo del país cuyos diplomáticos directores acentúan el tono neutro y acrílico de sus páginas (recuerdo de viejas expropiaciones); se le ve con poncho y sombrero de chalán montando un caballo de paso; recorre una barriada en coche descubierto; etc., etc., etc. Todo en olor de multitud y al compás de las voces «¡chino! ¡chino! ¡chino!». Como Velazco Alvarado en 1968, ¿lo recordará? Y claro, las encuestas aún lo apoyan. Que yo sepa, la pregunta «¿sabe usted exactamente lo que esta determinación significa en relación con sus derechos?» no encabeza el cuestionario. Pero más allá de los porcentajes fríos, la televisión no da ejemplos indicadores como és-

te: «¿Qué piensa de Fujimori? —Que está bien. —¿Por qué? —No sé». La ingenuidad, el desconocimiento, la poca claridad en las ideas explican el resultado de las encuestas totalmente favorable al cierre del Congreso y del Poder Judicial, pero también explican porcentajes adversos como éstos: 17% aceptaría un golpe puramente militar y el 81% no lo aceptaría. La confusión es abrumadora. Ese pueblo al que tanto apela Fujimori es una entidad enferma que busca una figura fuerte, de tipo paternal, que lo salve y que lleve a cabo, de cualquier forma, lo que este nuevo samurai emponchado repite desde hace algunos meses, que acabará con la subversión y el narcotráfico a más tardar en 1995. Lo que el pueblo quiere es un «salvador», pero ignora que la relación puede convertirse en la muy estrecha y tenebrosa que une a un torturado con su torturador.

Ignora, además, que ha sido colocado en el medio de un fuego cruzado entre dos bandos ahora más claramente definidos: las Fuerzas Armadas instituidas en el gobierno y la alianza terrorismo-narcotráfico. Fujimori ha hecho justamente lo que Sendero Luminoso quería, ponerle al frente unas Fuerzas Armadas investidas de poder político. De ahí que desde el domingo 5 de abril las dimensiones de algunas acciones terroristas hayan crecido y, al parecer, así seguirá ocurriendo. Algunos nos preguntábamos por qué Sendero no utilizaba toda su potencia agresiva en sus atentados explosivos, por ejemplo, considerando sólo la gran cantidad de dinamita que roba y obliga a entregar semanalmente en las minas del país. Pues bien, tres ataques con coches bomba cargados de dinamita han dejado muertos y heridos civiles y militares y han destruido por lo menos dos comisarías y causado fuertes daños en un cuartel y casas vecinas, esta semana. Y, acosado por las acusaciones de corrupción del jefe de gobierno y por la culpa de haber pertenecido a su partido, fue asesinado el primer *ex*-parlamentario. De ahora en adelante, con un Ejecutivo y unas Fuerzas Armadas que no dan cuentas a nadie y con grupos armados que no conocen otra vía que la destrucción irracional, ese destino que, según Fujimori, nos espera puede no ser otro que el de una guerra subterránea con muchos miles más de muertos y desaparecidos en corto tiempo. Por eso el gobierno argentino es enérgico con este régimen, porque sabe que en las circunstancias que vive el Perú la experiencia argentina es una lamentable

enseñanza. Fujimori ha declarado que no quiere la militarización de la lucha contra Sendero, pero sus socios en el poder no conocen las sutilezas de otro tipo de combate. Del mismo modo, nada hay en la conducta de Fujimori durante su gobierno constitucional, ningún rasgo de su perfil psicológico, que nos lleve a pensar que su voluntad no sea otra que la del enfrentamiento. Eso hizo con los otros poderes y con instituciones desde que asumió el cargo en 1990, excepto con las Fuerzas Armadas. Eso y mentir sobre algunos puntos esenciales, como en el hecho de no reconocer que el fracaso de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico son obra suya y de las Fuerzas Armadas que jefatura. Al decidir un golpe de estado, Fujimori, como cualquier otro terrorista, se sitúa fuera de la legalidad para acusar y juzgar a quienes le parezca.

Ahora bien, ¿para qué le sirve al «gobierno de emergencia y reconstrucción nacional» la libertad de prensa? En las primeras semanas, para obtener un casi imposible reconocimiento internacional o, al menos, para diluir sospechas. ¿Por qué tenemos que creer que si el gobierno no toleró la «presión» y la «obstrucción» (son términos oficiales) del Legislativo y otras instituciones durante veinte meses, va a soportar por más tiempo la oposición de la prensa? Primero vigiló y censuró los medios de comunicación, al tercer día anunció el retiro de las fuerzas del «orden» en su apoteósica visita al diario *El Comercio*. El mensaje había sido entregado, sólo faltaba que fuese recogido. Hoy, un sector de nuestros medios de comunicación está ya en el camino de la autocensura, más por supervivencia que por engaño o por intención de no provocar un estallido. Saben que las instituciones que podrían garantizar sus derechos en el país se hallan desactivadas y que cuando se restituyan bien pueden convertirse en prolongaciones del nuevo poder. Saben que no tienen defensa contra el terrorismo, que el gobierno puede negarles la custodia como la retiró a los parlamentarios opositores. Esos medios que pretenden mantenerse en la cuerda floja anticipan, no sabemos cuánto, el comportamiento futuro del pueblo que hoy apoya una aberración que no quiere llamar golpe de Estado ni mucho menos dictadura.

Ana María Gazzolo